

EDITORIAL



Como de costumbre, el CINEP quiere poner en la discusión pública los avances de investigación y reflexión tanto de sus investigadores como de algunos colegas y amigos, con la finalidad de contribuir a la construc-

ción de una comunidad académica centrada en la búsqueda de solución a los grandes problemas que aquejan al país. Así, el presente número de *CONTROVERSIA* se inicia con las reflexiones de Mauricio García Durán sobre los veinte años de procesos de paz en Colombia, que de alguna manera se complementan con la mirada de Diego Escobar y Karin Adriana Rodríguez sobre el movimiento ciudadano por la paz. Estas dos miradas sobre los años recientes se complementan con el análisis de Ingrid Johanna Bolívar sobre la historiografía de la Violencia de los años cincuenta y con la mirada sobre la coyuntura internacional que hacen Adolfo Atehortúa y Diana Rojas Rivera, que señalan algunas implicaciones atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos para Colombia y el resto del mundo.

Mauricio García parte de la creciente polarización de la opinión pública frente al proceso de paz y del poco tiempo que le resta al actual presidente para lograr avances que lo hagan irreversible, para realizar un análisis de la naturaleza del conflicto en la larga y mediana duración que ayuda a establecer sus niveles de negociabilidad. En ese sentido, la intensificación y la dinámica de la confrontación como disputa territorial entre guerrilleros y paramilitares, la incidencia del narcotráfico en ella y las transformaciones recientes de la lógica de los actores armados, junto con las consecuencias que todo esto tiene en términos de vio-

laciones a los DD HH y al DIH, lo hacen concluir que la confrontación armada en Colombia se ha venido transformando de manera que se acerca peligrosamente a los niveles de la guerra civil tal como la consideran los cánones internacionales. Esta naturaleza del conflicto incide en sus niveles de negociabilidad, pues a medida se privatiza y degrada la confrontación armada se va desdibujando la identidad política del conflicto y de su eventual negociación. Esta reflexión del autor concluye con la pregunta sobre la medida en que el conflicto colombiano está maduro para una negociación.

A partir de este interrogante, García tipifica los diversos modelos de negociación y emprende un recorrido histórico de los procesos de negociación desde 1982 hasta nuestros días con un enfoque comparativo que permite apreciar las ventajas y desventajas, los logros y las fallas de cada uno de los presidentes en este elusivo proceso, hasta desembocar en el análisis del modelo de negociación del actual presidente Pastrana, donde se contrastan los procesos de acercamiento del gobierno con las FARC y el ELN. Finalmente, se presentan tres posibles escenarios de evolución de la negociación: un avance sustancial de las negociaciones con los dos grupos insurgentes, que se considera posible aunque remoto; una negociación que continúa como hasta hoy, lenta y sin mayores avances, que se considera probable pero que tendría repercusiones muy negativas para el próximo gobierno; y, una ruptura del proceso y una escalada del conflicto, que retrasaría la salida negociada por unos diez años más, cuya posibilidad se ve incrementada por la reacción internacional en contra del terrorismo.

Esta mirada un tanto pesimista puede equilibrarse o profundizarse con el artículo sobre "el rostro oculto del movimiento ciudadano por la paz" de Diego Escobar, del CINEP, y Karin Rodríguez, de la Asam-

blea Permanente de la Sociedad Civil, que empiezan por sentar las bases para la comprensión de la movilización ciudadana por la paz a partir de su caracterización como "movimiento social" que responde a una determinada "estructura de oportunidades políticas" determinada en buena parte por el entorno político imperante y a "unas estructuras de movilización", los canales colectivos, tanto formales como informales, mediante los cuales la gente puede organizarse y movilizarse. Y la interacción entre estas estructuras de movilización y las oportunidades políticas, resumen los autores, produce procesos colectivos de interpretación, que enmarcan las acciones colectivas. Para el caso colombiano, ellos toman como parte de esta estructura de oportunidades los avances de la Constitución de 1991 sobre todo en lo que respecta al derecho a la paz y los mecanismos para impulsar la participación ciudadana, lo mismo que la creación del Consejo Nacional de Paz. A partir de este marco, los autores destacan las principales iniciativas en las que se expresa el movimiento ciudadano por la paz. Esto permite una mirada de conjunto sobre el origen, los objetivos, la organización y la composición de estos grupos, lo mismo que su desarrollo en el tiempo.

Esta mirada desde los esfuerzos por construir la paz, sea por la vía de la negociación política entre Estado y subversión o por la movilización autónoma de la sociedad, puede contrastarse de alguna manera con la mirada histórica de Ingrid Bolívar sobre la Violencia de los años cincuenta, cuya memoria difusa sigue pesando todavía en el imaginario de los colombianos sobre el tema. La autora pretende realizar una mirada de conjunto sobre algunas investigaciones regionales sobre la Violencia de entonces a partir de la pregunta sobre cómo se configura el Estado en las regiones y sobre qué papel juega la Violencia en esos procesos de integración territorial y social que caracterizan la construcción del Estado. Ella parte de que el Estado no se implanta de manera homogénea ni al mismo tiempo en los diferentes territorios del país, sino que su proceso de construcción debe diferenciar tiempos, territorios y grupos sociales específicos, cuya arti-

culación se produce a veces por medio de la Violencia. Por eso, la explicación de la diferenciación regional de la Violencia debe tener en cuenta las formas de cohesión social ya existentes en las diferentes regiones y localidades, su proceso de poblamiento, las formas de poder local que en ellas se conforman y la manera como estos poderes locales se articulan al conjunto de la Nación y el Estado.

A partir de la diferenciación entre regiones centralmente integradas y zonas de frontera introducida por Mary Roldán en su estudio sobre la Violencia en Antioquia, Bolívar trata de leer de manera diferenciada diversos procesos de violencia de acuerdo a las diferencias regionales, la diferente articulación de las regiones con la nación y el Estado, y la diferente respuesta de éste en cada caso. Para ello, se apoya en la lectura general que hace Paul Oquist sobre la violencia colombiana, que confronta con los estudios realizados por Mary Roldán sobre Antioquia, Carlos Miguel Ortiz sobre el Quindío, James Henderson sobre el Tolima, Darío Betancur y Marta García sobre el Valle del Cauca, Medófilo Medina y Darío Fajardo (sur del Tolima). Estos trabajos regionales son reforzados por análisis más generales como los de Daniel Pecaú, Jesús Antonio Bejarano, Catherine Legrand, Elssy Marulanda, José Jairo González, Marco Palacios, Keith Christie, Gonzalo Sánchez y Donny Meertens.

El análisis y el contraste de estas obras, de diferente enfoque y cobertura tanto espacial como temporal, permiten mostrar a la autora cómo la modalidad y la cronología de la Violencia va diferenciándose según la relación de cada región con el Estado, lo mismo que según la cohesión social interna y los grupos locales de poder que se estructuran en ellas. Y según se manifiesten en ellas los conflictos agrarios, que expresan un tipo específico de relaciones entre el campo y la ciudad, el Estado central y las regiones, y entre las distintas fuerzas productivas. Y según la modalidad de los conflictos agrarios, la movilización de la Violencia será colectiva o individual y, finalmente, retomando a Gonzalo Sánchez, la autora señala la relación entre el estado de la cuestión agraria y las posibilidades de la

consolidación y expansión de las organizaciones guerrilleras.

Finalmente, esta mirada sobre procesos de guerra y paz es complementada con un ensayo de Diana Marcela Rojas Rivera, del IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, y Adolfo León Atehortúa Cruz, del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, sobre las eventuales consecuencias de los atentados terroristas del 11 de septiembre para la política mundial en general y para la colombiana, en particular. Su ensayo, titulado "Después de las torres. Implicaciones de los sucesos del 11 de septiembre para el mundo y Colombia", parte de la sorpresa con que el mundo entero recibió la noticia para mostrar luego los cambios de postura a los que se vio obligado el presidente Bush, que pasó rápidamente del aislacionismo y unilateralismo iniciales a moverse de nuevo en un mundo multipolar e interdependiente, donde necesitaba aliados. Otro cambio importante fue el descubrimiento del pueblo norteamericano de una sensación nunca antes experimentada: el sentimiento de debilidad y vulnerabilidad ante amenazas de violencia no convencional.

Después de señalar estos cambios, los autores analizan la evolución del discurso del gobierno norteamericano frente al problema y la respuesta a él, que se fue haciendo más compleja y matizada, lo que no ha evitado algunas equivocaciones. Luego, analizan el entorno económico, amenazado desde antes por tendencias recesivas, que se profundizaron por el ambiente de desconfianza generado por el terrorismo, y las medidas diseñadas para afrontar la crisis, caracterizadas por los autores como "la resurrección del viejo Keynesianismo". Otro cambio de entorno tiene que ver con las características del nuevo tipo de guerra con la que comienza el siglo XXI, que modifican los mapas cognitivos a los que estábamos acostumbrados: es una guerra de múltiples actores, no necesariamente nacionales, que hacen difícil identificar el rostro del enemigo y sus motivaciones; es una guerra desterritorializada, donde no hay un único frente de guerra y donde las operaciones no están forzosamente ligadas a un

espacio geográfico, es una guerra globalizada, donde se mezclan lo local y lo global y se alteran los tiempos de la guerra. Y es una guerra donde los medios de comunicación juegan un importante papel: es una guerra transmitida en vivo y en directo.

Finalmente, los autores adelantan algunas hipótesis sobre las redefiniciones que estos acontecimientos tendrían para Colombia, después del Plan Colombia escrito durante la administración Clinton y la Iniciativa Regional Andina (IRA), presentada por la administración Bush al Congreso estadounidense. Las discusiones sobre los proyectos de ayuda en el nuevo contexto internacional permitieron identificar, según Atehortúa y Rojas, dos posiciones contrapuestas: un sector crítico continúa dudando sobre la efectividad de la fumigación para la erradicación de los cultivos de uso ilícito y de la ayuda otorgada previamente, ya que no se han implementado estrategias encaminadas hacia el fortalecimiento de la justicia y los programas de desarrollo alternativo, que hacían parte integral del Plan Colombia. Algunos congresistas han llegado a pensar que la ayuda ha llevado a una intensificación de la guerra, que se expresa en el crecimiento del paramilitarismo. Todas estas críticas han llevado a algún recorte del presupuesto inicial del IRA, algunos condicionamientos en materia de derechos humanos, el congelamiento de los fondos para la fumigación mientras no se demuestre que nos son peligrosos para la salud humana, etc. En cambio, un importante grupo de congresistas se inclina a ir más allá de la lucha contra el narcotráfico para llevar la ayuda militar a la lucha contra la amenaza de los grupos terroristas colombianos, que convertiría a Colombia en un frente más de la guerra global contra el terrorismo internacional. Y esto tendría consecuencias profundas para la negociación política con los grupos insurgentes, ya que es muy difícil justificar un proceso de paz con grupos terroristas. De ahí tanto la cautela del presidente Pastrana para no recurrir a esa calificación como la exigencia de Tirofijo de que el gobierno se defina claramente al respecto. Pero tampoco parece que los Estados Unidos estén interesados, al menos por ahora, en crear

otro foco del conflicto además de Afganistán y Medio Oriente.

Esperamos que la lectura combinada de estos artículos, que contrastan los condicionamientos que el contexto internacional significa para el desarrollo del proceso de paz en Colombia con las vicisitudes de las negociaciones realizadas durante estos veinte años y el desarrollo del movimiento ciudadano por la paz, junto con la mirada sobre los procesos regionales de la Violencia de los años cincuenta, puede servir para la reflexión de los lectores de **CONTROVERSIA** encaminada a la construcción del nuevo país que todos anhelamos.

Fernando E. Bernal